



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Ciudad de México, **a once de septiembre de dos mil veinticuatro.**

Resolución que **REVOCA** la respuesta emitida por el sujeto obligado, en virtud de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Presentación de la solicitud de información. El doce de junio de dos mil veinticuatro, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se presentó una solicitud de acceso a la información pública al sujeto obligado, por medio del cual se requirió lo siguiente:

Descripción clara de la solicitud de información: “Responder de forma breve y clara en un mismo oficio evitando señalar instrucciones para redirigir a otras plataformas de respuesta y/o información lo siguiente;

Informar el nombre, nivel del cargo, sueldo, así como la dirección que se encuentran adscritas las siguientes personas que laboran actualmente en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL);

* Verónica Athenea Maldonado Cruz

* Lesly Giovana Moreno Moreno .” (sic)

Modalidad preferente de entrega: Entrega a través del portal

II. Respuesta del sujeto obligado. El diez de julio de dos mil veinticuatro, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado notificó una respuesta por medio de la Plataforma Nacional, mediante el oficio número FGR/UETAG/003094/2024, del nueve de julio del año en curso, emitido por su Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, en los términos siguientes:

“... Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 1°, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPI); 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

República (LFGR); 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20° del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, en relación con su solicitud de acceso a la información, dirigida a esta Fiscalía General de la República (FGR), consistente en:

[Transcripción de la solicitud de información de mérito]

Al respecto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la LFTAIP, su solicitud fue turnada para su atención a la unidad administrativa competente, la cual manifestó que se actualiza una imposibilidad jurídica para pronunciarse sobre la existencia o no de la información solicitada, en virtud de que hacerlo sería proporcional a aseverar la adscripción de las personas de su interés como personal de la Institución, situación que podría atentar, en su caso, en contra de su vida, seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, así como el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), por ello, es oportuno realizar la transcripción de dichos preceptos legales mismos que son del tenor literal siguiente:

“Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Además de lo previsto en el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, que establece:

“Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.”

En consecuencia, tomando en consideración lo dispuesto en el Octavo de los citados Lineamientos, así como en los artículos 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la causal de reserva invocada se sustenta a través de la aplicación de la prueba de daño siguiente:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Hacer público cualquier dato o información que haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo adscrito a esta Fiscalía General de la República, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública y nacional, en virtud de que, como ya lo demostró esta Fiscalía General de la República en la controversia constitucional 325/2019, y así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de esta, e inclusive fue confirmado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19 BIS, se atentaría de manera directa en contra de la vida, seguridad y salud de dichas personas, pues los miembros de las asociaciones delictivas podrían aprovechar esa información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan sustraerse de la acción de la justicia y, por lo tanto, quedar impunes, aunado a que podrían tomar represalias por las investigaciones instauradas en su contra, lo que impactaría en la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta Institución, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

En este sentido, con la finalidad de cumplir no solo con objetivos conferidos constitucionalmente a la Fiscalía General de la República, sino también para mantener la seguridad pública y nacional del Estado mexicano -en la colaboración con todas las instituciones democráticas del país- es que dichas funciones son realizadas por las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, policías y peritos, e invariablemente por el personal administrativo adscrito a las diversas unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica, este último si bien es cierto que no está en la primer línea de intervención, también lo es que -por la naturaleza de las funciones de esta Institución-, en auxilio de aquellas, es quien tienen acceso a toda la información e insumos generados en la investigación de delitos, por lo que dar a conocer datos sobre estas pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares.

Así, resulta claro que la participación del personal administrativo es de vital relevancia, pues, desde la elaboración, envío y recepción de oficios entre las unidades administrativas o instituciones gubernamentales, hasta la integración de expedientes que en su caso se requieran les es posible el acceso a información sensible contenida en esos documentos, que evidentemente debe ser resguardada con el mayor sigilo.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que en la aludida resolución de la controversia constitucional 325/2019, el Alto Tribunal constitucional sostuvo que el personal administrativo tiene injerencia en la producción de información clave para procurar la impartición de justicia en el mercado criminal más peligroso de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que permitir a los agentes criminales conocer cualquier tipo de información del personal adscrito a la Fiscalía General de la República revelaría su capacidad de reacción; por ello, es perjudicial realizar la identificación de dicho personal, pues se pondría en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

familiares. Además, concluyó que esta Fiscalía acreditó fehacientemente que, de entregarse la información requerida, se comprometería el ejercicio de las facultades constitucionales y con ello la seguridad pública del país.

En ese mismo contexto, durante la sustanciación de la controversia, respecto del informe rendido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia adscrito a la entonces Coordinación de Métodos de Investigación, la Corte confirmó que revelar la información de las personas servidoras públicas que integran a la Fiscalía General de la República las expone a distintos tipos de riesgos, dependiendo del mercado criminal de que se trate, pues esta Fiscalía debe llevar a cabo sus funciones bajo la perspectiva de mercados criminales, es decir, el personal opera en una dimensión específica de acuerdo con el tipo de delito de que se trate, por lo que la proporción del riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General se da en función de las actividades que desempeña su personal y la tasa de delitos por cada cien mil habitantes en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

Con dicho informe, se demostró que únicamente con entregar el nombre y cargo de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República, se permitiría acceder a datos identificativos, académicos, electrónicos, patrimoniales, biométricos y los referentes a familiares de las personas servidoras públicas. Por lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que revelar la identidad, cargo y otros datos concentrados de quienes están encargados de la investigación y persecución de los delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene la Institución y por consecuencia, vulneraría o afectaría el ejercicio de las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas a esta Fiscalía General de la República.

En esa tesitura, ha quedado demostrado de forma indubitable que, si dicha información y conocimientos cayeran en manos de la delincuencia, esta podría atentar, intimidar, coaccionar, violentar y en general poner en riesgo su vida, seguridad y salud de manera potencial en contra de estas personas, pudiendo realizar contra ellas actos inhumanos para allegarse de información.

En adición a lo anterior, la identificación de estas y de sus actividades en cumplimiento del servicio público que tienen encomendado permite que eventualmente puedan ser localizados mediante la búsqueda a través de instrumentos como internet y redes sociales.

Luego, pueden ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues, además de tener disponible la información institucional, les sería posible conocer su ubicación y actividades rutinarias, lo cual sería de utilidad para interceptarlas; aspecto que, de ocurrir, impactaría



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

negativamente en su seguridad, así como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.

El riesgo de perjuicio con la divulgación de los datos de identificación de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República supera el interés público general de que se difunda en razón de que, como ya se dijo, divulgar datos que lleven a la identificación y ubicación de las personas servidoras públicas de esta Institución, en cualquier categoría o puesto, los hace blancos identificables y no solo pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, sino también las actividades realizadas por esta Fiscalía General de la República, toda vez que podrían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información relacionada con el combate y persecución de los delitos federales.

El que los distintos mercados criminales identifiquen y conozcan plenamente al personal que compone a la Institución y cuenten con información respecto a su capacidad de fuerza y reacción, esto es, el número total de personal, sus cargos y dónde se encuentran ubicados, expone a esta Fiscalía General de la República a amenazas y ataques que necesariamente tienen implicaciones negativas en el ejercicio de sus competencias constitucionales y, por tanto, se compromete la seguridad pública de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la resolución emitida en la controversia constitucional en comento que esta Fiscalía acreditó con suficiente claridad la relación causal general entre la entrega de la información relativa a los servidores públicos de la Institución y la afectación a la seguridad pública.

Ahora bien, respecto a la acreditación de la conexión causal, la Suprema Corte, tomando en consideración la información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, concluyó que conociendo el nombre de las personas físicas que laboran en la Fiscalía General de la República y recopilando información de internet, es posible identificar plenamente a la persona; de modo que un simple dato que pudiera parecer inofensivo, puede arrojar información relativa a su edad, sexo, CURP, experiencia profesional, grado académico, domicilio laboral, inclusive cambios de adscripción, domicilio personal, bienes muebles e inmuebles, así como, características físicas, amigos, familiares y grado de parentesco, lo que incluye cónyuges, exparejas e hijos, así como la escuela en la que estudian estos; por lo que entregar el nombre de cualquier persona servidora pública de la Institución revelaría el 100% del estado de fuerza de la Institución.

El anterior fenómeno puede ser explicado por la teoría del mosaico, la cual constituye una herramienta que da cuenta de cómo es que funciona el flujo de información y, con ello, la construcción de inteligencia. Se trata de un proceso que describe cómo se recopila, combina y



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

procesa información, de tal manera que convierte información inofensiva en conocimiento útil. La metodología que se utiliza esencialmente consiste en recopilar piezas de información dispersas y después unir las con la finalidad de tener una visión de conjunto o "mosaico".

Como se ha establecido previamente, a partir de un dato que pudiese parecer inofensivo, como pudiera ser el nombre de una persona, potencializa que un agente criminal lo utilice para deducir, a partir de un dato independiente, una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación para fines mal intencionados, en este caso, para evadir la procuración de justicia o, peor aún, llevar a cabo actos de contrainteligencia para combatir frontalmente a los agentes encargados de la investigación y persecución de los delitos en los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que el Alto Tribunal estableció que, si bien es un derecho de las personas imputadas, conocer el nombre y datos del servidor público que lo acusa —salvo tratándose de delincuencia organizada donde la autoridad judicial puede autorizar se mantengan en reserva—, lo cierto es que conocer esa información no deriva del ámbito de protección del derecho de acceso a la información, sino del derecho a gozar de un debido proceso y una defensa adecuada. El que una persona en ejercicio de su derecho de acceso a la información solicite el nombre y cargo de todo el personal de la Fiscalía General de la República no quiere decir que deba obtener el mismo resultado, pues se trata del ejercicio de derechos distintos y de acceso a información diferente.

Adicionalmente, proporcionar la información no solo revelaría cuántas personas funcionarias públicas están al frente de la investigación y persecución de los delitos del orden federal a nivel nacional, sino también la Delegación Estatal a la que se encuentran adscritas y, en consecuencia, cómo se encuentran distribuidas y organizadas por entidad federativa; todo lo cual, invariablemente, revelaría su ubicación y organización, lo que implica dejar ver no solo su identidad, sino también la capacidad de reacción que tiene el Estado mexicano —a nivel de la República y por entidad federativa— para investigar y perseguir la comisión de los delitos federales. Dicho en otras palabras: permitir lo anterior, significa revelar información que impacta negativamente en el desempeño de las labores institucionales en relación con sus facultades y atribuciones constitucionales en materia de seguridad pública.

En cuanto a lo expuesto, debe tomarse en cuenta que la Fiscalía General de la República funciona como una corporación formada por eslabones, es decir, si alguno de los eslabones se ve afectado, el desempeño de sus funciones afecta las demás partes y funciones de la Institución; de modo que revelar información de inteligencia que afecta a una parte sustancial de la Institución equivaldría a provocar una vulneración a su funcionamiento en otros aspectos.

Robustecen lo anterior, las aclaraciones de la resolución de la aludida controversia constitucional 325/2019, hechas por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en donde manifiesta que:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

“...está de por medio la integridad de los servidores públicos de la FGR que son quienes materializan las funciones constitucionales del ente autónomo, pues constituye hecho notorio que el clima de violencia criminal en el que ejercen sus funciones tanto las instituciones de procuración de justicia, como las instituciones policiacas e, inclusive, algunos miembros de la judicatura genera enormes riesgos que es necesario disminuir en beneficio de tales personas, pues ello redundaría en la protección de los derechos humanos más elementales de los integrantes de nuestra sociedad en general.

...

Difundir los nombres de algunos de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y de otras personas de la FGR, a personas diversas de las que participan en los procesos penales federales, así como revelar la estructura administrativa de sus áreas administrativas, debilita la seguridad pública, cuyos fines son, como ya expuse, la salvaguarda de los derechos humanos relativos a la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

...

Además, la Constitución Federal no realiza distinción alguna entre un tipo de personal y otro de la FGR, sino que su artículo 21 se refiere a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, por lo que considero que esta protección de reserva de datos incluye a todos los integrantes que conformen a todo ese ente constitucional autónomo, sin discriminar a ninguno de sus integrantes, y mucho menos privarlo de la protección que le brinda la reserva tanto de sus datos, como de la estructura administrativa a la que pertenece.

Las personas servidoras públicas administrativas de la FGR también forman parte de la estructura para la investigación y el combate al delito, y son también vulnerables de poner en riesgo su vida, seguridad y salud, no considerarlo así, constituye una postura discriminatoria, como si solamente los Agentes del Ministerio Público Federal correrán riesgos y los demás empleados estuvieran exentos, no obstante que unos y otros comparten espacios de trabajo e intervienen en los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la FGR.”

Bajo esa tesitura, la divulgación de la información relacionada al personal adscrito a esta Institución federal actualiza el riesgo de perjuicio a la vida, seguridad o salud, así como para sus familias y personas cercanas, por lo que el ejercicio de ponderación de derechos de la colectividad que debe prevalecer, es aquel relacionado con la procuración de justicia bajo los principios constitucionales contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que, si bien es cierto que el artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso a la información, la Suprema Corte al resolver el amparo directo 2931/2015, concluyó de manera esencial que el derecho a ser informado no es absoluto, pues, a pesar de que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, también se debe proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad y salud de las personas, así como a la salvaguarda de la seguridad pública y nacional.

De ahí se tiene que la calidad de persona servidora pública no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad y privacidad, que deben gozar todas las personas. Por el contrario, existe un interés general o superior en esos derechos frente al derecho de acceso a la información de un particular, en una ponderación frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de sus familias y círculo cercano, información la cual debe ser considerada como clasificada.

En ese sentido, tomando en consideración la proporción de riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General de la República, las funciones que desempeña el personal y la tasa de delitos del orden federal en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el revelar la identidad y cargo de quienes tienen la responsabilidad de investigar y perseguir delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene esta Institución y, por consecuencia, vulneraría las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas.

Por lo expuesto, se concluye que clasificar como reservada la información o datos que permitan la identificación, inclusive de aquella que asevere su adscripción en el presente o pasado, como personas servidoras públicas Fiscalía General de la República, resulta el medio menos restrictivo frente al derecho de acceso a la información en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.

Robusteciendo lo anterior, es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente Tesis, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afectan intereses nacionales o derechos de terceros, tales como el derecho a la vida, la salud o en su caso la privacidad de los gobernados, a saber:

[Se transcribe Tesis]

Finalmente, no se omite señalar que, la presente solicitud de información fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Institución, el cual en su Vigésima Cuarta



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Sesión Ordinaria celebrada el día 09 de julio de 2024, determinó procedente la reserva del pronunciamiento institucional de lo peticionado, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110 fracción V de la LFTAIP. Por lo que hace al acta respectiva, así como el periodo de reserva, podrá consultarlos en su momento en la siguiente liga electrónica:

<http://www.fgr.org.mx/en/transparencia/AccessoInformacionPublica.>"

Si derivado de la respuesta a su solicitud de información le surge alguna duda, puede llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensión 505716; o bien, escribirnos al correo electrónico leydetransparencia@fgr.org.mx, en donde con gusto le atenderemos. ." (sic)

III. Presentación del recurso de revisión. El once de julio de dos mil veinticuatro, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona recurrente interpuso su recurso de revisión en los términos siguientes:

Acto que se recurre y puntos petitorios: "La información que se solicito no pone en riesgo la vida e integridad de las personas, tal como la autoridad requerida lo intenta informar. Solo se esta pidiendo datos del puesto de su cargo como servidores publicos." (sic)

IV. Trámite del recurso de revisión.

a) Turno. El once de julio de dos mil veinticuatro, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente **RRA 9879/24** al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada Ponente, para los efectos del artículo 156, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

b) Admisión del recurso de revisión. El dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, se dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte interesada, otorgándole a las partes un plazo de siete días hábiles posteriores a dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 156, fracciones I, II y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que se notificó a las partes.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Asimismo, se corrió traslado al sujeto obligado con la finalidad de allegarse de mayores elementos y que informará a este Instituto Nacional, lo siguiente:

“ ...

1. En relación con la clasificación de la información con fundamento en el artículo 110, fracción V, de la Ley Federal, se le requiere para que, de acuerdo con lo previsto en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales) realice lo siguiente:

- a. acredite el vínculo entre las personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos sería afectado con la entrega de la información requerida, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.
- b. Respecto de la totalidad de personas servidoras públicas que se encuentra reservando la información, informe los cargos o puestos que ocupan con adscripción a ese sujeto obligado.
- c. En relación con el punto anterior, especifique las funciones que realizan dichas personas servidoras públicas, proporcionando el instrumento normativo en el que se encuentren establecidas sus atribuciones...”

c) Alegatos del sujeto obligado. El diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, el sujeto obligado remitió sus alegatos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el oficio número FGR/UETAG/003575/2024, emitido por su Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, en los términos siguientes:

“ ...

A L E G A T O S

PRIMERO. Es preciso mencionar que este Sujeto Obligado cumplió cabalmente con los tiempos y formas previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente al momento de la interposición de la solicitud, así como con lo dispuesto en los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, puesto que la petición se derivó para su atención a la Oficialía Mayor (**OM**); toda vez que de las atribuciones que le confiere la Ley de la Fiscalía General de la República (**LFGR**), el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República (**EOFGR**) y demás normatividad aplicable, se desprende que es la unidad administrativa que pudiera contar con la información requerida.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

SEGUNDO. Respecto del agravio señalado por el particular, se advierte que el recurrente se inconforma por la clasificación del pronunciamiento sobre la existencia o no de la información. Sin embargo, se reitera la respuesta inicial, consistente en que existe una imposibilidad jurídica para aseverar o negar la adscripción de esas personas a esta Institución, toda vez que, hacerlo, pondría en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de las personas de su círculo cercano.

TERCERO. En atención al requerimiento de información adicional, así como con la intención de brindarle mayores elementos que le permitan contar con insumos suficientes para resolver el medio de impugnación que nos ocupa, en calidad de información clasificada y para el uso exclusivo de esa Ponencia, se informa lo siguiente:

“2. Respecto de la totalidad de personas servidoras públicas que se encuentra reservando la información, informe los cargos o puestos que ocupan con adscripción a ese sujeto obligado..”

Se hace de su conocimiento que *Verónica Athenea Maldonado Cruz* y *Lesly Giovana Moreno Moreno* se encuentran adscritas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, mismas que ostentan los puestos de Directora General Adjunta de Averiguaciones Previas y Auxiliar Ministerial C, respectivamente.

“3. En relación con el punto anterior, especifique las funciones que realizan dichas personas servidoras públicas, proporcionando el instrumento normativo en el que se encuentren establecidas sus atribuciones.” y “Acredite el vínculo entre las personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos sería afectado con la entrega de la información requerida, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.”

Al respecto, se hace del conocimiento que el personal señalado realiza funciones **operativas** encaminadas a la investigación y persecución de delitos federales, especialmente en materia electoral, pero que pudieran encontrarse relacionados inclusive con la materia de delincuencia organizada.

En ese contexto, es importante concientizar a ese Instituto que el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, tiene como encomienda garantizar el Estado de Derecho mediante la implementación de estrategias orientadas a la investigación y persecución de los delitos en materia electoral y fortalecer la confianza ciudadana a través de una procuración de justicia eficaz y eficiente apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Por lo tanto, divulgar información que hace identificables a sus servidores públicos podría ponerlos en riesgo, toda vez que integrantes de los grupos criminales pudieran amenazarlos, coaccionando y/o amedrentando para disuadirlos a continuar con las investigaciones a su cargo, ante el riesgo inminente que pudiese haber respecto a su vida, seguridad e integridad y la de su familia.

No es óbice el señalar que, según datos de Laboratorio Electoral, en el proceso electoral 2023-2024 fueron asesinadas 80 personas relacionadas con delitos en materia electoral, de las cuales 34 eran aspirantes a una candidatura, 65 hombres, 13 mujeres y 4 personas de las cuales no fue posible determinar su género; por otro lado, desde el 4 de junio de 2023 al 23 de mayo de 2024, se reportaron 272 casos relacionados con delitos en materia electoral, 65 atentados, 108 casos de amenazas y 17 secuestros.

Aunado a ello, en este periodo se registraron otros 74 candidatos que sufrieron algún tipo de ataque violento por parte de la delincuencia organizada u otras agresiones como ataques armados donde alguien cercano al candidato murió, o sufrió algún tipo de atentado, secuestro, y/o amenazas tangibles o bien, en el caso de los candidatos, tuvieron consecuencias como renunciar a la contienda.

Además, según información de Data cívica, se registraron ataques a 42 integrantes de partidos políticos, 157 servidores públicos que padecieron alguna agresión o ataque de la delincuencia organizada en el periodo de campañas y 25 familiares de dichos servidores públicos también atacados. Con estos datos, la organización concluyó que el periodo electoral 2023-2024 fue más violento que el de 2020-2021 y también más violento que 2018.

Derivado de lo anterior, el personal de la Fiscalía aludida comanda las investigaciones relacionadas con la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, uso indebido de recursos públicos federales, uso de programas sociales con fines político-electorales y hacer proselitismo en la jornada electoral.

Otras conductas que son sancionadas es la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de casillas, introducir, sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos oficiales y acarreo de votantes el día de las elecciones, que influyan en el sentido del voto, así como la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de casillas, introducir, sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos oficiales y acarreo de votantes el día de las elecciones, que influyan en el sentido del voto.

Sin embargo, la realidad que enfrenta hoy en día el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, es el financiamiento y uso de los recursos de los partidos políticos; pues,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

existe una preocupación latente respecto a los recursos de los partidos políticos y de los candidatos para que no se infiltre el dinero del crimen organizado; es decir, ya no es suficiente con fiscalizar que el financiamiento público prevalezca sobre el privado o que no se rebasen los topes legalmente permitidos, sino el origen lícito de las aportaciones de los particulares.

Aunado a que, la máxima preocupación para nuestro sistema electoral es la posible participación activa y directa de candidatos involucrados con el crimen organizado, en donde las organizaciones criminales buscan esquemas para garantizar sus intereses y protección de forma previa a la llegada del poder de gobernantes y representantes populares; en ese sentido, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, busca generar medidas de carácter preventivo que eviten a las organizaciones criminales el que se infiltren en los procesos electorales y castigar a quienes siendo miembros de delincuencia organizada pretendan involucrarse en los procesos electorales o cuando se pruebe el dolo de un candidato o precandidato de involucrarse en la contienda electoral para favorecer los intereses de la delincuencia organizada y que sea considerado un delito electoral.

Es a todas luces evidente que, la delincuencia organizada constituye una amenaza para el desarrollo de los procesos electorales, y es a través del uso de dinero ilícito como ésta puede infiltrarse en las campañas políticas y como ya se ha señalado previamente, derivado de los recientes acontecimientos en el proceso electoral de este año, deja en evidencia que diversos grupos de la delincuencia organizada cuentan cada día con mayor capacidad para atentar contra el Estado, de ahí que sea una exigencia inminente el fortalecimiento y la actuación oportuna de la institución y por ende la seguridad y protección de quienes detentan cargos como servidores públicos, sobre todo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, al hacer frente a la delincuencia organizada respecto al uso de recursos de procedencia ilícita que se pudiera infiltrar en las campañas electorales.

Desde esa perspectiva, la difusión de la información solicitada podría poner en riesgo la vida, seguridad y salud del personal adscrito a esa Fiscalía, y con ello, vulnerar las actividades de persecución e investigación de los delitos a cargo de ese ministerio público.

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito:

PRIMERO. - En atención a las consideraciones señaladas en el presente escrito, tener por reconocida mi personalidad, y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

SEGUNDO. - En su oportunidad y previo los trámites de ley, **confirme** la respuesta otorgada por esta Fiscalía General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 fracción II, de la LFTAIP.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

.” (sic)

d) Cierre de instrucción. El nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 156, fracciones VI y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a las partes.

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y no existiendo diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional **280/2023**, y con fundamento en los artículos 6º, Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción II, 146, 150 y 151, y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción II, 146, 147 y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, en los diversos 6, 10, 12, fracciones I, V y XXXV, y 18, fracciones V, XIV y XVI del Estatuto Orgánico de este Instituto.

SEGUNDA. Metodología de estudio. De las constancias que forman parte de este recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la *litis*, es necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que en Derecho proceda, por ser su estudio preferente.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

I. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente.¹

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene las hipótesis de improcedencia:

“Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando:

- I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 147 de la presente Ley;
- II. Se éste tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por la recurrente;
- III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 de la presente Ley;
- IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 150 de la presente Ley;
- V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
- VI. Se trate de una consulta, o
- VII. La recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.”

De las documentales que integran el expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente:

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta a la persona solicitante, plazo previsto en el artículo 147 de la Ley Federal de la materia.
2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante diverso tribunal del Poder Judicial de la Federación, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso.

¹ Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: **“Improcedencia.** Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.”



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

3. En el artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión, y en el caso concreto, resulta aplicable lo previsto en la **fracción I** relativa a la clasificación.
4. La veracidad de la información no es controvertida a través del presente medio de impugnación.
5. No se realizó una consulta.
6. La parte recurrente no amplió su solicitud inicial a través del medio de impugnación que nos ocupa.

II. Causales de sobreseimiento. Por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.

Al respecto, en el artículo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se prevé:

“Artículo 162. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

- I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
- II. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan;
- III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o
- IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.”

Del análisis realizado por este Instituto a partir de las documentales que conforman el medio de impugnación, se advierte que **no se actualiza alguna causal de sobreseimiento**; en tanto que no existe constancia de que la parte recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, o que, admitido el recurso de revisión, haya aparecido alguna causal de improcedencia.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

En consecuencia, este Órgano Resolutor considera que debe entrarse al estudio de fondo del presente asunto.

TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, en atención a la solicitud de acceso con folio citada al rubro, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta otorgada, el agravio de la parte interesada y los alegatos del ente recurrido.

Una persona solicitó conocer el nombre de adscripción, nivel del cargo, sueldo, así como la dirección que se encuentran adscritas dos personas servidoras públicas identificadas.

En respuesta, el ente recurrido, señaló lo siguiente:

- Que se actualizaba una imposibilidad jurídica para pronunciarse sobre la existencia o no de la información solicitada, en virtud de que hacerlo sería proporcional a aseverar la adscripción de las personas de su interés como personal de la Institución, situación que podría atentar, en su caso, en contra de su vida, seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, así como el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos).
- Que hacer público cualquier dato o información que haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo adscrito a esta Fiscalía General de la República, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública y nacional, en virtud de que, como ya lo demostró esta Fiscalía General de la República en la controversia constitucional 325/2019.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

- Que las funciones realizadas por las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, policías y peritos, e invariablemente por el personal administrativo adscrito a las diversas unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica, este último si bien es cierto que no está en la primer línea de intervención, también lo es que -por la naturaleza de las funciones de esta Institución-, en auxilio de aquellas, es quien tienen acceso a toda la información e insumos generados en la investigación de delitos, por lo que dar a conocer datos sobre estas pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares.
- Que proporcionar la información no solo revelaría cuántas personas funcionarias públicas están al frente de la investigación y persecución de los delitos del orden federal a nivel nacional, sino también la Delegación Estatal a la que se encuentran adscritas y, en consecuencia, cómo se encuentran distribuidas y organizadas por entidad federativa;

Inconforme, la persona recurrente se inconformó con la clasificación de la información.

Una vez admitido el presente medio de impugnación, mediante sus alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial; asimismo, dio atención al Requerimiento de Información Adicional, en los siguientes términos:

- Que Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno se encuentran adscritas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, mismas que ostentan los puestos de Directora General Adjunta de Averiguaciones Previas y Auxiliar Ministerial C, respectivamente.
- Que el personal señalado realiza funciones operativas encaminadas a la investigación y persecución de delitos federales, especialmente en materia electoral, pero que pudieran encontrarse relacionados inclusive con la materia de delincuencia organizada.
- Que el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, tiene como encomienda garantizar el Estado de Derecho mediante la implementación de estrategias orientadas a la investigación y persecución de los delitos en materia



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

electoral y fortalecer la confianza ciudadana a través de una procuración de justicia eficaz y eficiente apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.

- Que divulgar información que hace identificables a sus servidores públicos podría ponerlos en riesgo, toda vez que integrantes de los grupos criminales pudieran amenazarlos, coaccionando y/o amedrentando para disuadirlos a continuar con las investigaciones a su cargo, ante el riesgo inminente que pudiese haber respecto a su vida, seguridad e integridad y la de su familia.

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de la presente resolución, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 197, 200, 202, 203, 217 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, tomando en consideración el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación de rubro **“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA.”**², que establece que “Conforme al sistema previsto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez tiene cierto arbitrio para asignar valor a las pruebas, salvo el caso en que la ley señale a cualquiera de éstas uno determinado, pero ello debe sujetarse a ciertas reglas, esto es, aquél debe decidir con arreglo a la sana crítica, sin concluir arbitrariamente, por lo que debe atender a las reglas de la lógica y de la experiencia, entendiéndose a la lógica, como una disciplina del saber o ciencia que tiene reglas y principios que son parte de la cultura general de la humanidad, y a la experiencia, como un conocimiento mínimo que atañe tanto al individuo como al grupo social, que acumula conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano, mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza...”.

² Tesis I.4o.A.40 K (10a.), emitida en la décima época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en octubre de 2018, libro 59, tomo III, página 2496, y número de registro 2018214.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, en razón del agravio expuesto.

Análisis de la clasificación en términos del artículo 110, fracción V.

Cabe señalar que, de la respuesta, se desprende que se clasificó el pronunciamiento respecto **del nombre del puesto, nivel del cargo, sueldo, así como la dirección que se encuentran adscritas dos personas servidoras públicas identificadas.**

Visto lo previo y, considerando que el derecho ejercido a través de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, versa sobre la prerrogativa del hoy recurrente a que se le conceda el acceso a información pública, es menester señalar que el artículo 97 de la multicitada Ley Federal de la materia, se precisa que el proceso de clasificación es aquel mediante el cual el sujeto obligado a través de su Comité de Transparencia, determina que la información en su poder, actualiza a alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, la cual debe ser aplicada de manera restrictiva y deberá contar con las siguientes características, de acuerdo a lo señalado en el artículo 103, 104 y 105 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

- El sujeto obligado deberá aplicar la carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información por actualizarse cualquier de los supuestos de reserva previstos en la Ley.
- El Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión, en la cual se deberá señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto en la norma legal invocada como fundamento.
- Asimismo, el sujeto obligado deberá aplicar en todo momento la prueba de daño, en la cual el ente recurrido debe justificar que:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.
2. El riesgo de perjuicio de la divulgación es superior al interés público de su difusión.
3. La limitación de adecuación al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar cualquier perjuicio.

- Por último, el sujeto obligado debe señalar el plazo al que estará sujeta la reserva.

En seguimiento a lo anterior, el numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales) señala que para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General de la materia, los sujetos obligados deberán atender lo siguiente:

- Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada.
- Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público o la seguridad nacional.
- Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico tutelado de que se trate.
- Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda.

- Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes.
- En los casos en que se determine la clasificación total de la información, se deberán especificar en la prueba de daño, con la mayor claridad y precisión posible, los aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar certeza al solicitante.

Es importante recordar que, desde respuesta inicial, el sujeto obligado clasificó el pronunciamiento como reservado, toda vez que divulgar información que los haga identificables pondría en riesgo su vida, seguridad y salud. Lo anterior, en términos del 110, fracción V de la Ley Federal de la materia y, proporcionado el hipervínculo para la consulta de su Acta.

En ese sentido, el artículo 110, fracción V de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, señala lo siguiente:

“Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;”

Asimismo, es necesario citar el Vigésimo Tercero de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información*, así como para la elaboración de versiones públicas:

“Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.”

De la normatividad citada se advierte que, como información susceptible de clasificarse como reservada se encuentra aquella cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, por lo que, para clasificarla bajo dicho supuesto, resulta necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.

Dicho lo anterior, se debe señalar que la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública* considera como información pública de oficio, los datos de servidores públicos, ya que su publicidad permite cumplir los objetivos que persigue dicha ley, entre los que se encuentran transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, sin embargo, en términos del artículo 68 de la Ley en comento, como excepción a la regla general sobre la divulgación de esta información encuentre en alguno de los supuestos de clasificación, ya sea reservada o confidencial.

En atención a la reserva invocada por la Fiscalía General de la República, cabe precisar que el artículo 6° Constitucional que dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Asimismo, es importante tomar en consideración que, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 3 que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

es pública, accesible a cualquier persona; salvo, que deba reservarse de forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

Igualmente, en el artículo 97 de la Ley Federal de la materia citada, se señala que la clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

En ese sentido, conviene mencionar que por regla general, el directorio de servidores públicos y la información que pueda obrar en su expediente personal, creado con motivo del cargo público que en su caso desempeñen, es una obligación de transparencia contemplada en el artículo 70, fracciones VII, VIII, X, XII, XVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), por lo que es información de naturaleza pública.

No obstante, existe una excepción relativa a aquellos servidores públicos que realicen actividades operativas en materia de seguridad, tal y como lo sostiene el **Criterio-SO/006/2009**. aplicable por analogía-; el cual, señala que existen servidores públicos tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional, a través de acciones preventivas y correctivas, encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones, en ese sentido, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de los nombres y de las funciones que desempeñan o desempeñaron estos servidores públicos puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes.

Es así como, el nombre de servidores públicos que desempeñan funciones de carácter operativas, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública son susceptibles de clasificarse como información reservada.

Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.

En ese sentido, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia. **La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos**, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Carta Magna señala.

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. **El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.**

En ese sentido, la Ley de la Fiscalía General de la República³, señala:

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio; ejercerá sus facultades atendiendo al orden público e interés social.
[...]

Artículo 7. En la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos de su competencia, el Ministerio Público de la Federación se auxiliará de las policías, incluyendo la Guardia

³ Disponible: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFGR.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Nacional y las instituciones de seguridad pública del fuero federal o común, así como de las personas investigadoras, personas peritas, personas analistas, y personas facilitadoras, quienes actuarán bajo su mando y conducción, en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las demás leyes y normatividad aplicable.

[...]

Artículo 11. La Fiscalía General, para el ejercicio de sus facultades, estará integrada por:

...

V. La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales;

...

Artículo 39. La Fiscalía General contará con personal directivo y de mando, personas agentes del Ministerio Público de la Federación, personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas, personas analistas y personas facilitadoras, así como personas servidoras públicas especializadas, profesionales, técnicas y administrativas necesarias para la realización de sus funciones previstas en las disposiciones legales aplicables.

...

Artículo 40. Son facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación las siguientes: I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal; II. Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia; III. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; IV. Iniciar con eficiencia, puntualidad y eficacia la investigación que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 131, fracción V, del Código Nacional, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito; V. Investigar y perseguir los delitos del fuero común respecto de los cuales se haya ejercitado la facultad de atracción, en los términos de las disposiciones aplicables.

...

Artículo 41. Con independencia de las facultades que señalan la Constitución, el Código Nacional, y las demás disposiciones aplicables, las personas agentes de la Policía Federal Ministerial deberán actuar durante la investigación bajo la conducción y mando de la persona agente del Ministerio Público de la Federación, en ejercicio de las siguientes facultades: I. Investigar hechos que puedan ser constitutivos de delito y los bienes relacionados o producto del mismo, llevando a cabo las técnicas de investigación autorizadas al efecto y que resulten necesarias; II. Constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, mediante los actos de investigación que resulten necesarios conforme a su ámbito de facultades; III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos y la identidad de las personas autores o de las personas partícipes en la comisión del delito, por lo que si durante la realización de actos de investigación se percata de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

la probable comisión de un delito diverso deberá dar cuenta inmediatamente a la persona agente del Ministerio Público de la Federación y proceder a su investigación.” (sic)

De la normatividad citada previamente, es posible desprender lo siguiente:

- La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio **a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación**, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.
- Tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.
- Específicamente, corresponde a la Fiscalía General de la República:
 - ❖ Investigar y perseguir los delitos;
 - ❖ Ejercer la acción penal;
 - ❖ Procurar la reparación del daño de las víctimas;
 - ❖ Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales;
 - ❖ Intervenir en el proceso de ejecución penal;
 - ❖ Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva, e
 - ❖ Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
- La Fiscalía cuenta con diverso personal que realiza funciones de carácter operativo, en cumplimiento a sus actividades de investigación y persecución de delitos, tales como los Agentes del Ministerio Público, peritos, policías, entre otros.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

- La Fiscalía General contará con personal directivo y de mando, personas agentes del **Ministerio Público de la Federación**, personas agentes de la Policía Federal, personas peritas, personas analistas y personas facilitadoras, así como personas servidoras públicas especializadas, profesionales, técnicas y administrativas necesarias para la realización de sus funciones.
- Por su parte, las **personas agentes del Ministerio**, se encargan de investigar y perseguir los delitos del orden federal; de promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia; de recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; de Investigar y perseguir los delitos del fuero común respecto de los cuales se haya ejercitado la facultad de atracción, en los términos de las disposiciones aplicables, etc.
- Por su parte, las personas agentes de la Policía Federal Ministerial deberán investigar hechos que puedan ser constitutivos de delito y los bienes relacionados o producto del mismo, llevando a cabo las técnicas de investigación autorizadas al efecto y que resulten necesarias; constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, mediante los actos de investigación que resulten necesarios conforme a su ámbito de facultades; etc.

Tomando en consideración lo anterior, así como las funciones que realizan las áreas del sujeto obligado, es posible advertir que diversos de los servidores públicos tienen a su cargo **funciones operativas relacionadas con la seguridad pública**.

Por otro lado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública⁴ dispone lo siguiente:

“Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las

⁴ Disponible: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

[...]

VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;

[...]

X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;

[...]"

Ahora bien, al considerar el análisis anteriormente efectuado, y observar que las tres figuras como los Ministerios, los peritos y los policías ministeriales de investigación, realizan funciones diversas.

Para el caso que nos ocupa, este Órgano Garante advierte que los puestos que ostentan las personas de las que se requiere información es el de Directora General Adjunta de Averiguaciones Previas y Auxiliar Ministerial C, respectivamente, ambas adscritas a la **Fiscalía Especializada en Delitos Electorales**.

En ese sentido, es importante destacar que, de conformidad con sus funciones los Agentes del Ministerio Público, solamente podrían actualizar el riesgo real, demostrable e identificable relativo a que se ponga en riesgo su vida, salud o seguridad, si se trataran de servidores públicos adscritos a la **Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada**.

Lo anterior tiene sustento, pues la identificación de quienes realizan actividades sustantivas, provocaría que puedan ser objeto de extorsiones, sobornos, dentro de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, se pueden ver tentados o amenazados por parte de los sujetos investigados o diversos, con el fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada respecto de las investigaciones que se realizan o realizarán, vinculadas con delincuencia organizada, y con ello anticiparse para obtener un



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

resultado favorable; de ahí que la protección de su identidad sea necesaria en aras de evitar que los agentes externos puedan realizar acciones en su contra.

En específico, **el Pleno ha sostenido dicho criterio**, al tomar en consideración el alto impacto social de la delincuencia organizada; de conformidad con la Organización Internacional de Policía Criminal, informa que la delincuencia organizada por lo general, **son redes delictivas organizadas que están implicadas en muchos tipos diferentes de actividades delictivas extendidas por varios países**. Estas actividades pueden incluir trata de personas, tráfico de drogas, mercancías ilícitas y armas, robo a mano armada, falsificaciones y blanqueo de capitales, lo anterior, es evidente que se traduce en que, la delincuencia organizada tiene un grado de alcance criminal, superior que la comisión unipersonal de un delito¹.

El jurista Javier Dondé Matute señala que, los delitos perpetrados por la delincuencia organizada se tratan de actos de violencia de **alto impacto** que buscan generar terror entre los miembros de las organizaciones propias o diversas y en la población civil, o con el objeto de coaccionar al gobierno en la defensa de sus negocios ilícitos.

El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional le da contenido al concepto de seguridad nacional que emplea el Código Penal Federal. Si bien no se menciona expresamente que la delincuencia organizada sea considerada una actividad que menoscaba la seguridad nacional, impedir que se la combata sí es un tema de seguridad nacional.

En este sentido, los juristas sostienen que las conductas violentas atribuibles a la delincuencia organizada tienen como efecto generar impunidad y constituyen ataques a la seguridad nacional, lo que genera arribar a la conclusión de que, es procedente la clasificación de los nombres de los **ministerios públicos que se encuentran adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia e Delincuencia Organizada**.

Ahora bien, dado que se señaló con especificidad que la adscripción de las personas es ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, no es posible establecer la forma en que se pondría en riesgo su vida, pues si bien realizan la investigación, prosecución y persecución de delitos, la realidad es que su actuar no se encuentra dentro de actividades vinculadas con la delincuencia organizada.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Ahora bien, con independencia de lo manifestado por el sujeto obligado en desahogo del RIA, en el sentido de que con motivo de los comicios 2023-2024, se registraron otros 74 candidatos que sufrieron algún tipo de ataque violento por parte de la delincuencia organizada, lo cierto es que el ámbito de competencia, de las servidoras públicas como ya quedó establecido son los presuntos delitos electorales, lo que no puede guardar relación con los ataques mencionados.

En ese sentido, contrario a lo esgrimido por la Fiscalía General de la República, **la publicidad de los datos requeridos respecto de personal ajeno a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, resulta de vital importancia e interés público**, pues son las principales encargadas de realizar las funciones del Ministerio Público para la persecución de los delitos, ello en atención al artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, entre otras, las siguientes atribuciones:

- Investigar y perseguir los delitos del orden federal.
- Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
- Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito.
- Iniciar con eficiencia, puntualidad y eficacia la investigación que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 131, fracción V, del Código Nacional, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito.
- Investigar y perseguir los delitos del fuero común respecto de los cuales se haya ejercitado la facultad de atracción.
- Determinar la procedencia de la detención de las personas imputadas por la comisión de hechos que la ley señale como delito.
- Realizar el aseguramiento y registro de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables.
- Participar en todas las etapas del procedimiento penal, desde la investigación inicial hasta que se dicte sentencia, conforme a lo previsto en el Código Nacional.
- Impugnar, en los términos previstos por la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables, las resoluciones judiciales.
- Informar a la persona víctima o a la persona ofendida del delito, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución, la Ley



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

General de Víctimas, el Código Nacional y las demás disposiciones legales aplicables, así como sus alcances, incluyendo el derecho de designar a la persona asesora jurídica.

- Garantizar en toda la investigación y el proceso penal los derechos de las personas víctimas establecidos en la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y en las leyes aplicables.
- Acceder, de conformidad con la legislación aplicable a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas.
- Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que así lo requieran las leyes aplicables.
- Informar y facilitar a las personas víctimas de nacionalidad extranjera el ejercicio del derecho a recibir asistencia consular por las embajadas o consulados, y comunicar sin demora esos hechos a dichas representaciones diplomáticas; con independencia de la asistencia y protección que les brinde las disposiciones jurídicas aplicables.
- Dictar las medidas necesarias para que la persona imputada reciba atención médica o psicológica de emergencia y demás medidas de protección idóneas para su seguridad, así como asegurar su cumplimiento, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
- Dictar las medidas necesarias que permitan garantizar la reparación del daño para la persona víctima o la persona ofendida.
- Presentar la acusación contra la persona imputada ante la autoridad judicial competente, y en general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos.
- Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas, así como las medidas de seguridad que en su caso correspondan.
- Intervenir en el procedimiento de ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad en los términos de las disposiciones legales aplicables.
- Intervenir en la extradición, entrega o traslado de personas imputadas, procesadas o sentenciadas, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en cumplimiento de los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.
- Solicitar y, en su caso, proporcionar la asistencia jurídica internacional que le sea requerida de conformidad con los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y lo dispuesto en la legislación aplicable.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Por lo que, proporcionar los nombres del personal ajeno a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, y su actuar debe de estar sujeto a escrutinio público, considerando que a través de esto es posible verificar las acciones y los servidores públicos que se encargan de perseguir delitos, además es deber del sujeto obligado publicitar el directorio de servidores públicos, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A efecto de robustecer lo analizado, este Instituto realizó una búsqueda de información en fuentes de acceso públicas, localizando que, respecto de la servidora pública Verónica Athenea Maldonado Cruz su cargo y adscripción son de conocimiento público, pues fue participante en conferencias con motivo de su desempeño como a continuación se observa:



Televisión Tabasqueña
21 de mayo ·
#Entérate En su intervención la titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, Verónica Athenea Maldonado Cruz, precisó que la figura de la mujer debe vincularse con el ámbito político, aunque muchos no están acostumbrados está no debe desaparecer, así será más presente.
Ver menos

#Entérate En su intervención la titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República,...

Las nota referida es valorada de conformidad con la tesis número 922656 titulada “**NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA**”⁵ misma que refiere, que las **notas periodísticas**, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren.

⁵ Disponible en: <http://sif.scjn.gob.mx/sifsist/Documentos/Tesis/922/922656.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Conforme a lo anterior, este Instituto advierte que el agravio de la parte recurrente, fundamentado en la fracción I, del artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta **fundado**, pues no es procedente la clasificación del nombre del puesto, nivel del cargo, sueldo, así como la dirección que se encuentran adscritas las servidoras públicas Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno, de conformidad con el artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTA. Decisión: Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera procedente **REVOCAR** la respuesta emitida por la Fiscalía General de la República y se instruye, a efectos de que proporcione el nombre del puesto, nivel, cargo, sueldo, así como la dirección que se encuentran adscritas las servidoras públicas Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno.

Ahora bien, toda vez que la modalidad elegida por la persona recurrente fue en medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento a esta resolución mediante dicha modalidad.

Lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de la persona recurrente a través del medio señalado en el recurso de revisión para efecto de recibir notificaciones.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se **REVOCA** la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo con lo señalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

SEGUNDO. El sujeto obligado, en un plazo no mayor de **diez días hábiles**, a partir del día hábil siguiente al de su notificación, deberá cumplir con la presente resolución, y posteriormente contará con un término de tres días para informar a este Instituto sobre su cumplimiento, con fundamento en el artículo 159, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artículos 168, 169, 170, 174 y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda.

QUINTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado para tales efectos y, por la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado, a través de su Unidad de Transparencia.

SÉPTIMO. Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono 800 TELINAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución.

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno a que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expida certificación de la presente resolución, para proceder a su ejecución.

NOVENO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Ponente

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de la
República

FOLIO: 330024624001567

EXPEDIENTE: RRA 9879/24

Así lo resolvieron por mayoría, y firman, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá Méndez con voto de calidad, Norma Julieta Del Río Venegas con voto disidente, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara con voto disidente, siendo ponente la tercera de los señalados, en sesión celebrada el 11 de septiembre de 2024, ante Ana Yadira Alarcón Márquez Secretaria Técnica del Pleno.

Adrián Alcalá
Méndez
Comisionado Presidente

Norma Julieta Del Río
Venegas
Comisionada

Blanca Lilia Ibarra
Cadena
Comisionada
Ana Yadira Alarcón
Márquez
Secretaria Técnica del Pleno

Josefina Román
Vergara
Comisionada

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión **RRA 9879/24**, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 11 de septiembre de 2024.

